

BERNARDO PERIÑÁN GÓMEZ
(Coord.)

DERECHO, PERSONA Y CIUDADANÍA

Una experiencia jurídica
comparada

AUTORES

ANDRÉS SANTOS, Francisco J.	RIBAS ALBA, José María
ALAÉZ CORRAL, Benito	RICART MARTÍ, Encarnació
ARIAS CASTAÑO, Abel	RODRÍGUEZ ENNES, Luis
COLORIO, Andrea	RODRÍGUEZ BENOT, Andrés
CUENA BOY, Francisco	RODRÍGUEZ MONTERO, Ramón P.
GUERRERO LEBRÓN, Macarena	TELLO LÁZARO, Juan Carlos
LAMBERTI, Francesca	VALIÑO ARCOS, Alejandro
MATTIANGELI, Daniele	VALPUESTA BERMÚDEZ, Macario
PERIÑÁN GÓMEZ, Bernardo	VALPUESTA FERNÁNDEZ, Rosario
RAMOS PRIETO, Jesús	VELA SÁNCHEZ, Antonio J.
VILLAGRASA ALCAIDE, Carlos	

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES

2010

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
NOTA DEL COORDINADOR	7
PRÓLOGO	9
 LA CIUDADANÍA EN EL MUNDO ANTIGUO: BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CATEGORÍA JURÍDICA 	
PERCORSI DELLA CITTADINANZA ROMANA DALLE ORIGI- NI ALLA TARDA REPUBBLICA , por <i>Francesca Lamberti</i>	17
I. IL CITTADINO E LA CITTÀ-STATO	18
II. IL <i>CIVIS</i> NELLA CITTÀ.....	19
III. L' «ASTRATTO» E IL «CONCRETO» DEL CITTADINO RO- MANO	30
IV. ROMA E I RAPPORTI CON L'ESTERNO FRA LA CADUTA DELLA MONARCHIA E L'ULTIMO SECOLO DELLA RE- PUBBLICA	35
V. LA POLITICA ROMANA DI COLONIZZAZIONE.....	44
VI. «IUS LATII», «IUS ADIPISCENDAE CIVITATIS PER MAGI- STRATUM» E «MUNICIPALIZZAZIONE» NELLA TARDA REPUBBLICA.....	50
VII. DOPPIA CITTADINANZA E <i>PATRIA COMMUNIS</i>	51
VIII. BIBLIOGRAFIA COMMENTATA.....	53
 CIUDADANÍA Y LATINIDAD EN LA ROMANIZACIÓN DE HISPANIA EN EL PERÍODO REPUBLICANO , por <i>Alejandro Valiño</i>	 57

	<u>Pág.</u>
I. ANTECEDENTES DE LA ORDENACIÓN PROVINCIAL DE <i>HISPANIA</i> DURANTE LA CAMPAÑA DE CONQUISTA.....	58
II. CONFIGURACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DE LA <i>HISPANIA</i> ROMANA EN EL PERÍODO REPUBLICANO	61
1. Denominación y funciones del «gobernador de la provincia» en <i>Hispania</i> durante el período republicano.....	61
2. Alcance de la demarcación provincial en <i>Hispania</i> : la situación de las ciudades preexistentes	66
III. COMUNIDADES CIUDADANAS EN <i>HISPANIA</i>	72
1. Breve referencia de concepto a la municipalización y colonización como instrumento para la romanización	72
2. Estatuto jurídico resultante de la romanización: <i>civitas optimo iure</i> vs. <i>ius Latii</i>	76
CITTADINANZA, PROPRIETÀ TERRIERA E HOROI DI GARANZIA NELL'ANTICA ATENE , por <i>Andrea Colorio</i>	91
I. ATENE: ECONOMIA DELLA POLIS TRA PRIMITIVISMO E MODERNISMO.....	92
II. IL DIRITTO DI CITTADINANZA E LA TITOLARITÀ DELLA TERRA: MOTIVI DI UNO STABILE RAPPORTO.....	98
III. BENI IMMOBILI E FORME DI GARANZIA REALE IMMOBILIARE.....	105
IV. HOROI: DELIMITAZIONE DELLA PROPRIETÀ PUBBLICA E PRIVATA.....	115
V. L'οἶκος DEL GIARDINO DI SKYTHES E GLI HOROI DI GARANZIA	119
VI. SIGNIFICATO E RAGIONI DELLA FUNZIONE DEI CIPPI..	127
APUNTES SOBRE LA <i>LEX GELLIA CORNELIA DE CIVITATE DANDA</i> , por <i>Bernardo Periñán Gómez</i>	133
I. PLANTEAMIENTO	134
II. LA <i>LEX GELLIA CORNELIA</i> EN SU ENTORNO HISTÓRICO....	141
1. Fecha y naturaleza.....	141
2. Antecedentes	142
3. Contenido y presupuestos para su aplicación	144
4. Vigencia y efectos	149
III. LA CIUDADANÍA ROMANA EN LA <i>LEX GELLIA CORNELIA</i> ..	151
1. La <i>civitas</i> romana como recompensa en interés de Roma ...	151
2. Efectos políticos de la concesión de la ciudadanía <i>ex lege Gellia Cornelia</i> : el caso de L. C. Balbo	154

	<u>Pág.</u>
A) La promoción de los destinatarios de la concesión en su comunidad de origen.....	154
B) La atribución de la <i>civitas</i> romana y el clientelismo político	158
IV. A MODO DE CONCLUSIÓN	161
 FUNDUS FIERI: ENTRE EL PRÉSTAMO LEGISLATIVO Y EL ACCESO A LA CIUDADANÍA ROMANA , por <i>Francisco Cuenca Boy</i>	
I. INTRODUCCIÓN, FUENTES Y LITERATURA.....	164
II. EL VALOR DE LAS FUENTES DIRECTAS SOBRE EL <i>FUNDUS FIERI</i>	166
III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL <i>FUNDUS FIERI</i> , SU PRESUNTO CARÁCTER BILATERAL Y SU OBJETO	170
IV. EL <i>FUNDUS FIERI</i> Y LAS LEYES DE CIUDADANÍA.....	176
V. <i>FUNDUS FIERI</i> Y <i>FOEDERA</i> : CLÁUSULAS CONTRACTUALES DE EXCLUSIÓN DE LA <i>CIVITAS</i> Y CONCESIONES INDIVIDUALES.....	183
 UNA REFLEXIÓN SOBRE LA <i>CUPIDITAS CIVITATIS ROMANAE</i>: EL <i>IUS MIGRANDI</i> , por <i>Macarena Guerrero Lebrón</i>	
I. INTRODUCCIÓN	188
II. EL <i>IUS MIGRANDI</i>	191
1. Origen y fundamento.....	191
2. Ejercicio del derecho.....	196
3. Sucesivas restricciones y abolición	200
III. CONSIDERACIONES FINALES.....	212
 EL <i>CIVIS</i> FRENTE AL PROCESO CRIMINAL ROMANO: UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS GARANTÍAS PROCESALES EN LA <i>COGNITIO EXTRA ORDINEM</i> , por <i>Macario Valpuesta Bermúdez</i>	
I. CUESTIONES PRELIMINARES.....	216
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROCESO CRIMINAL <i>EXTRA ORDINEM</i>	219
1. Las actas.....	221
2. La acusación.....	224
3. La prueba	232
4. La sentencia	242
5. La ejecución de la pena.....	246

	<u>Pág.</u>
III. VALORACIÓN CRÍTICA DEL SISTEMA DE LA <i>COGNITIO EXTRA ORDINEM</i>	248
LA CITTADINANZA ROMANA <i>ERGA OMNES</i>. UNA NUOVA ANALISI RAGIONATA DI UN PROVVEDIMENTO DISCUSSO , por <i>Daniele Mattiangeli</i>	255
I. PROBLEMÁTICA GENERAL.....	256
II. IL PAPIRO DI GIESSEN N.º 40 E LE TESTIMONIANZE DI CASSIO DIONE E ULPIANO	258
III. LO SCARSO INTERESSE DEI CONTEMPORANEI E GLI «ERRORI» DI GIUSTINIANO E AURELIO VITTORE	267
IV. UNA NUOVA TEORIA STORICO-EVOLUZIONISTICA DELLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ROMANA « <i>ERGA OMNES</i> ».....	271
V. UNA CONCLUSIONE PROBLEMÁTICA DELL'ARGOMENTO	273
POPULUS ROMANUS Y RES PUBLICA: COMUNIDAD POLÍTICA Y CIUDADANÍA , por <i>José María Ribas Alba</i>	275
I. INTRODUCCIÓN	276
II. LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL DEL <i>POPULUS ROMANUS</i>	277
III. EL PODER DELEGADO DE LOS CARGOS PÚBLICOS	279
IV. TERMINOLOGÍA CONSTITUCIONAL: <i>CIVITAS, QUIRITES</i>	291
V. EL CONSENSO CONSTITUCIONAL: ANALOGÍA ENTRE EL <i>POPULUS</i> Y LAS ASOCIACIONES (<i>COLLEGIA</i>).....	295
VI. ORGANIZACIÓN CONSTITUCIONAL: LA <i>RES PUBLICA</i> ..	297
LA PERSONA ANTE EL DERECHO DE AYER Y DE HOY	
LA CONCEPCIÓN DEL MATRIMONIO EN LA ÉPOCA DEL DERECHO ROMANO CLÁSICO. PUNTOS DE CONTACTO CON LAS LEGISLACIONES AUTONÓMICAS SOBRE UNIONES ESTABLES DE PAREJA , por <i>Encarnació Ricart-Martí</i>	303
I. INTRODUCCIÓN: LOS ORÍGENES DEL MATRIMONIO EN ROMA.....	304
II. EL MATRIMONIO Y EL CONCUBINATO EN EL DERECHO ROMANO CLÁSICO	306
III. UNA VISIÓN COMPARATIVA SOBRE LA ACTUALIDAD, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA ESPAÑOLA.....	313

	<u>Pág.</u>
SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA	315
LA ADOPCIÓN ROMANA: CONTINUIDAD Y DISCONTINUIDAD DE UN MODELO , por <i>Luis Rodríguez Ennes</i>	317
I. INTRODUCCIÓN.....	318
II. LA ETAPA CODIFICADORA.....	322
III. VICISITUDES ULTERIORES.....	330
LA CLIENTELA ROMANA Y EL CLIENTELISMO POLÍTICO , por <i>Juan Carlos Tello Lázaro</i>	335
I. INTRODUCCIÓN Y PREMISA.....	336
II. HACIA UN CONCEPTO DE CLIENTELA	339
1. <i>Status quaestionis</i>	339
A) Extensión.....	339
B) Denominación	340
2. Perspectiva etimológica.....	344
3. Una aproximación conceptual desde la doctrina moderna...	347
III. LA EVOLUCIÓN DE LA CLIENTELA EN ROMA	350
1. Recorrido diacrónico	350
A) La clientela religiosa	351
B) La clientela política	353
C) La clientela social.....	353
D) ¿El final de la clientela?	354
2. Variantes de clientela.....	356
A) La clientela extranjera	356
B) La clientela pública	357
3. El colonato	358
4. La clientela privada y su vertiente ilegal.....	359
IV. EL USO POLÍTICO DE LA CLIENTELA.....	361
1. En la antigua Roma	361
2. En la actualidad.....	364
V. CONCLUSIONES.....	366
LA «CASA» EN GALICIA. NOTAS CARACTERÍSTICAS Y APUNTES HISTÓRICOS SOBRE LA REGULACIÓN NORMATIVA DE SU INDIVISIBILIDAD , por <i>Ramón P. Rodríguez Montero</i>	369

	<u>Pág.</u>
I. LOS ELEMENTOS PERSONAL Y REAL, INTEGRANTES DE LA CASA TRADICIONAL GALLEGA	370
II. LA CONSERVACIÓN Y CONTINUIDAD DE LA «CASA» TRADICIONAL GALLEGA COMO IDEAL. INSTRUMENTOS CONSUECUDINARIOS DESTINADOS A CONSERVAR LA INDIVISIBILIDAD DEL PATRIMONIO FAMILIAR: LA «MEJORA» Y LA «COMPAÑÍA FAMILIAR GALLEGA»	374
III. LA REGULACIÓN DE LA «CASA» Y EL «LUGAR ACASARADO» EN GALICIA. DETALLES DE UN PROCESO NORMATIVO.....	384
 EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO: ALGUNAS CUESTIONES JURÍDICAS ESENCIALES , por <i>Antonio J. Vela Sánchez</i>	
	415
I. INTRODUCCIÓN	416
II. LA CONCEPCIÓN PERSONALISTA DEL DERECHO CIVIL COMO FUNDAMENTO DE LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LAS RELACIONES HOMOSEXUALES	418
III. EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO ...	422
IV. ALGUNAS CUESTIONES JURÍDICAS ESENCIALES QUE PLANTEA EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DE IGUAL SEXO	429
1. Criterio jurídico de regulación	430
2. Determinación de la filiación derivada del empleo de técnicas de reproducción asistida.....	434
3. La adopción por estos matrimonios.....	437
 EL CRITERIO DE CONEXIÓN PARA DETERMINAR LA LEY PERSONAL: UN RENOVADO DEBATE EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO , por <i>Andrés Rodríguez Benot</i>	
	447
I. CONSIDERACIONES GENERALES	448
II. LA DECANTACIÓN POR LA NACIONALIDAD O POR LA RESIDENCIA HABITUAL DESDE LA ÓPTICA DE LA MULTICULTURALIDAD	450
1. El carácter versátil de la nacionalidad.....	452
2. El ánimo integrador de la residencia habitual	458
III. EL CRECIENTE RELIEVE DE LA RESIDENCIA HABITUAL EN EL DERECHO COMUNITARIO EUROPEO DE FAMILIA.....	463

LA CIUDADANÍA EN LA ACTUALIDAD:
UN VALOR JURÍDICO INACABADO

DIVERSIDAD Y CIUDADANÍA: UNA APROXIMACIÓN DESDE EL PENSAMIENTO FEMINISTA , por <i>Rosario Valpuesta Fernández</i>	475
I. UNA EXPLICACIÓN.....	476
II. EL BINOMIO IGUALDAD-UNIFORMIDAD.....	480
III. UN PRIMER ASALTO A LA UNIFORMIDAD: EL MAL LLAMADO SUFRAGIO UNIVERSAL.....	491
IV. LA CONQUISTA DE LA CIUDADANÍA POR LAS MUJERES ...	498
V. CIUDADANÍA Y DIVERSIDAD	533
NUEVOS RETOS LEGISLATIVOS EN LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA , por <i>Carlos Villagrasa Alcaide</i>	543
I. LA INFLUENCIA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, EN SU VIGÉSIMO ANIVERSARIO, RESPECTO DEL DESARROLLO LEGISLATIVO DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA	544
II. EL MAYOR RETO INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA: ACABAR CON LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES.....	547
III. LAS PERSPECTIVAS LEGISLATIVAS EN TORNO A LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA: LA PROPUESTA DEL DERECHO CIVIL DE CATALUÑA	552
CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA Y MULTICULTURALISMO EXTERNO , por <i>Benito Aláez Corral</i>	565
I. LAS CONDICIONES CONSTITUCIONALES DEL EJERCICIO MULTICULTURAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES	566
1. Preliminar.....	566
2. Multiculturalismo externo, nacionalidad y ciudadanía democráticas	568
II. LA DIFUMINACIÓN DE LA HOMOGENEIDAD ÉTNICO-CULTURAL DEL ESTADO: DE LA NACIONALIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA A LA PROGRESIVA CIVILIZACIÓN DE NACIONALIDAD.....	572

	<u>Pág.</u>
III. CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA E INTEGRACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL EJERCICIO MULTICULTURAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.....	578
1. Los diversos grados de ciudadanía democrática.....	578
2. Integración social a través del ejercicio multicultural de los derechos fundamentales	583
IV. LOS LÍMITES AL EJERCICIO MULTICULTURAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES: ACOMODACIÓN INTERCULTURAL A TRAVÉS DE ASIMILACIÓN CONSTITUCIONAL-DEMOCRÁTICA.....	586
1. Límites derivados de las condiciones constitucionales de ejercicio de los derechos fundamentales	586
2. Límites derivados del ideario educativo constitucional como mecanismo de asimilación a la cultura democrática.....	591
3. Límites derivados de las condiciones de acceso a la nacionalidad como vía para el disfrute de una ciudadanía plena .	595
4. Límites derivados del margen de decisión política que preside las políticas de derechos fundamentales.....	598
LOS ENEMIGOS DE LA LIBERTAD COMO SOLICITANTES DE LA NACIONALIDAD: ANÁLISIS COMPARADO DEL PROBLEMA EN LOS SISTEMAS CONSTITUCIONALES NORTEAMERICANO Y ESPAÑOL, por Abel Arias Castaño	603
I. INTRODUCCIÓN	604
II. EL PROBLEMA EN LA EXPERIENCIA HISTÓRICA CONSTITUCIONAL NORTEAMERICANA	606
III. ESBOZO DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS IDEAS ANTI-DEMOCRÁTICAS DE LOS SOLICITANTES DE LA NACIONALIDAD EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL	615
IV. A MODO DE CONCLUSIÓN.....	619
CIUDADANÍA Y DEBER DE CONTRIBUIR: ALGUNOS APUNTES A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL, por Jesús Ramos Prieto	621
I. PLANTEAMIENTO	622
II. LA CONTRIBUCIÓN AL SOSTENIMIENTO DE LOS GASTOS PÚBLICOS COMO UN DEBER CONSTITUCIONAL....	625
1. Aproximación al significado jurídico del deber de contribuir..	625
2. Deber de contribuir, solidaridad y fraude fiscal.....	630
III. LIBERTAD IDEOLÓGICA Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA ANTE EL PAGO DE TRIBUTOS: ¿PUEDEN INVOCARSE ESOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA TRIBUTARIA?.....	634

	<u>Pág.</u>
1. La objeción de conciencia fiscal: concepto, modalidades y argumentos a favor y en contra	634
2. La negativa del Tribunal Constitucional a admitir la objeción de conciencia fiscal	638
3. Estado de la cuestión en el Derecho español.....	642
IV. LA CONTRIBUCIÓN AL SOSTENIMIENTO DE LOS GASTOS PÚBLICOS CON ARREGLO A LA CAPACIDAD ECONÓMICA EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ...	646
1. La interpretación flexible de este criterio de reparto de la carga tributaria por el Tribunal Constitucional.....	648
A) La capacidad económica no es el único criterio de justicia tributaria	648
B) Doble exigencia lógica de búsqueda de la riqueza imponible sin agotarla	649
C) Posibilidad de que el tributo grave una riqueza potencial.....	649
D) Prohibición de gravamen de rentas inexistentes o ficticias	652
E) Compatibilidad con la utilización del tributo con fines extrafiscales	653
F) Exigencia aplicable al conjunto del sistema tributario ...	654
2. Un inesperado y peligroso vaciamiento de contenido de este principio constitucional: el Auto 71/2008	655
V. CONCLUSIÓN	659
LA CIUDADANÍA ROMANA, ¿UN MODELO CLÁSICO DE «CIUDADANÍA COSMOPOLITA»? , por <i>Francisco J. Andrés Santos</i>....	661
I. PREMISA	662
II. «CIUDADANÍA COSMOPOLITA»: CONCEPTO Y TIPOS	662
III. LAS LECCIONES DE LA HISTORIA: LA CIUDADANÍA ROMANA.....	671
IV. ¿ES REALMENTE DESEABLE UNA «CIUDADANÍA COSMOPOLITA» (SI ES QUE PUEDE HABERLA)?	678

NOTA DEL COORDINADOR

No privo al lector más que un momento de la lectura del Prólogo que tan brillantemente ha escrito para esta obra la Profesora Carmen VELASCO, mi maestra, a la que me une el común magisterio del Profesor MURGA —con quien trabajé desde 1991 a 1997— y la intensísima etapa de retos y vivencias en la Universidad Pablo de Olavide desde su fundación, en la que tantas cosas he aprendido de ella. Precisamente la razón de esa *Nota* es agradecerle a la Profesora VELASCO y al resto de los autores que han colaborado en este libro su celo e interés, y cómo no su Ciencia, para la culminación de esta obra colectiva. La única sugerencia general y deliberadamente sutil desde la coordinación a los autores ha sido que se asumiese en alguna medida la perspectiva comparada, ya fuera en sentido vertical o histórico, ya en sentido horizontal o entre ordenamientos jurídicos contemporáneos. Por otra parte, a cada uno de ellos —de nosotros— corresponden las opiniones en su caso vertidas en cada trabajo, que no han de ser necesariamente compartidas por el resto de los autores o por el coordinador de esta obra fruto del esfuerzo común.

Esa perspectiva comparada a la que nos referíamos se ha aplicado decididamente a la obra en general y a ella obedece la distribución de las diferentes aportaciones en cada uno de los tres bloques en que se divide el libro, en los que se afronta el tema anunciado en el título desde tres perspectivas complementarias: «La ciudadanía en el mundo antiguo: bases para la construcción de una categoría jurídica», «La persona ante el Derecho de ayer y de hoy» y «La ciudadanía en la actualidad: un valor jurídico inacabado». La agrupación de los trabajos en estos bloques se ha llevado a cabo por aproximación, con la idea de facilitar

el orden de la obra y su coherencia interna, pues el tema general pretende ordenar la diversidad huyendo de la simple compilación.

En este sentido, la premeditada heterogeneidad que presenta la publicación busca ofrecer pinceladas de un tema jurídico de gran actualidad e importancia en nuestro tiempo, *Derecho, persona y ciudadanía*. Este tópico hunde sus raíces en el pasado clásico de Roma, si es que puede seguir hablándose de pasado en este terreno a la vista del resultado de algunas contribuciones. Es más, la experiencia romana está conectada con nuestro presente y nuestro futuro próximo ante la construcción de un nuevo Derecho de personas y de una nueva ciudadanía europea, pues uno y otra son resultados de procesos históricos. Como coordinador, espero que esta obra contribuya a superar las angostas lindes de una u otra área del saber jurídico y a descubrir lo mucho que de enriquecedor tienen las perspectivas amplias (es decir, transversales, multidisciplinares, diacrónicas y comparadas) en la investigación jurídica.

Por último, he de resaltar que la presente publicación se enmarca en el conjunto de las actividades del Proyecto de investigación I+D del Ministerio de Educación y Ciencia SEJ2007-61825/JURI (MEC-FEDER, 2007-2010 «Derecho, persona y ciudadano en la experiencia histórica y contemporánea»), del que tiene el honor de ser Investigador Principal quien suscribe.

Bernardo PERIÑÁN GÓMEZ
Universidad Pablo de Olavide

PRÓLOGO

Cada época histórica ha tenido su afán jurídico y su protagonismo específico en los diferentes países de la cultura occidental. A grandes rasgos, en la Antigüedad el centro de gravedad estuvo en Italia, con los juristas romanos que son los grandes creadores del Derecho en sentido estricto, y después con los juristas medievales que difundieron y desarrollaron aquel excelente cuerpo doctrinal. En la Edad Moderna, este centro se traslada a Francia con MONTESQUIEU como figura estelar, y en el siglo XIX pasa a Alemania bajo el impulso de SAVIGNY y la Pandectística que abarca en su influencia la primera mitad del siglo XX. En nuestro tiempo actual parece que el protagonismo se ha desplazado al entorno jurídico anglosajón que con tanta fuerza se está manifestando en los modelos jurídicos actuales.

En ese contexto es bueno recordar, aunque en referencia a épocas bastante más lejanas, el concepto de romanidad como modelo cultural europeo que llega hasta la Edad Media, y que se caracteriza por su capacidad de asimilar las aportaciones de culturas precedentes y diferentes entre sí en convivencia si no feliz, acertada. Un cosmopolitismo cultural en donde, como es natural, también se encuadra lo jurídico y que sería un buen ejemplo a imitar en momentos que vivimos de conflictividad intercultural.

Me parece muy alentador, con mayor sentido en los tiempos difíciles por los que está pasando nuestra disciplina, que este proyecto haya sido impulsado desde la romanística, y posteriormente compartido, en un afán decididamente multidisciplinar, con otros especialistas de Derecho público y privado.

La ciudadanía y sus derechos constituyen el hilo conductor de la serie de investigaciones que conforman esta obra compuesta por

reflexiones sobre un tema, o mejor, sobre una amalgama de temas conexos de interés general y recurrente a lo largo de la historia: la lucha por su consecución llevada a cabo por hombres y mujeres desde tiempos remotos, la democracia, la nacionalidad o la familia entre otras interesantes cuestiones.

Ciertamente la ciudadanía puede ser enfocada desde muchos puntos de vista, pero es en esencia un concepto jurídico. Ésa es la primera idea fundamental que late en esta obra que me honro en prologar. La segunda es que este concepto, la *civitas*, nace en el mundo antiguo para el mundo de hoy, se retoma desde la Revolución Francesa con renovado impulso y ha seguido construyéndose día a día sobre la base de la vieja idea romana: el ciudadano es previo al Estado, y su protagonismo es una característica del sistema de la que no se debe prescindir si se quieren evitar ciertas experiencias que hicieron desgraciada una parte importante del siglo XX en nuestra Europa.

El volumen se divide en tres bloques, de los que el primero lleva por título *La ciudadanía en el mundo antiguo: bases para la construcción de una categoría jurídica*. Este primer bloque está compuesto por ocho artículos cuyos autores reflexionan sobre tan polifacética materia. F. LAMBERTI afronta el proceso de ampliación de la romanidad que se produce a partir de la época republicana, bajo el prisma de la ciudadanía, subrayando el carácter jurídico de la misma y la importancia de la *civitas*, como base, para la expansión de sus derechos. En un trabajo que podría ser complemento del anterior, A. VALIÑO se detiene en el análisis de la organización política y administrativa romana de *Hispania* en el periodo republicano, particularmente en relación con las comunidades locales preexistentes antes de la extensión de la latinidad, en época de Vespasiano, y posteriormente de la ciudadanía.

La aportación de A. COLORIO se traslada al mundo griego para ofrecernos un interesante análisis sobre la vida económica cotidiana ateniense, centrándose en uno de los mecanismos fundamentales para la creación de capital: la garantía real inmobiliaria, *horoi*, inaccesible a los extranjeros los cuales, paradójicamente, eran esenciales para la economía de la ciudad.

Volviendo a Roma, B. PERIÑÁN a la luz del *Pro Balbo* ciceroniano, lleva a cabo un estudio sobre la *Lex Gellia Cornelia de civitate danda*, una de las leyes que permitieron a los generales romanos atribuir la ciudadanía a personas que habían prestado servicios a Roma, como agradecimiento de los mismos; y en ese contexto profundiza sobre el propio concepto de ciudadanía que subyace en el citado cuerpo legal, y consecuentemente, en su época. Desde otra perspectiva, y en torno también a las leyes que regularon la ciudadanía citadas por Cicerón, se desarrolla la investigación de F. CUENA; el autor centra su investiga-

ción en el *fundus fieri*, complejo sistema utilizado por los pueblos que querían incorporar a su ordenamiento alguna ley romana, y su relación con ciertas leyes, especialmente la citada *Lex Gellia Cornelia*, favorecedoras de las concesiones individuales de ciudadanía.

También en relación con la adquisición de la ciudadanía se encuentra el estudio de M. GUERRERO: el reconocimiento del *ius migrandi* a los latinos que trasladaban su domicilio a la urbe, y se inscribían en el censo con el objeto de obtener la ciudadanía romana. Las negativas consecuencias socio-económicas, esencialmente motivadas por la despoblación paulatina derivada de la demanda masiva de tal derecho, traen consigo una serie de limitaciones que terminan materializándose en su abolición.

Sobre las garantías jurisdiccionales en el proceso criminal romano versa el trabajo a cargo de M. VALPUESTA. En su texto analiza aspectos generales del procedimiento criminal de la *cognitio*, concluyendo que la eficacia de sus medidas represoras sobre conductas consideradas lesivas para el bien común se logró a costa de la disminución esencial de las garantías preexistentes que protegían a los ciudadanos sometidos a la acción de los tribunales de justicia.

D. MATTIANGELI presenta una novedosa interpretación acerca de los motivos, el alcance e incluso la «autoría» de la *Constitutio* antoniniana que procuró la ciudadanía a casi todos los habitantes del imperio. Se basa para ello en el análisis de un variado elenco de fuentes directas e indirectas, de las que extrae ciertas contradicciones, imprecisiones y carencias que le animan a plantear la discusión sobre algunos aspectos de esta disposición imperial aún no resueltos por la doctrina.

Al análisis de las categorías constitucionales romanas dedica sus páginas J. M.^a RIBAS; el *civis*, como miembro de la asamblea ciudadana, participaba directamente en la gestión de los asuntos públicos dentro de las competencias atribuidas a aquella: juzgar, legislar y elegir a los cargos públicos. Los magistrados electos, en su condición de representantes de la comunidad política, eran los encargados de la administración de los intereses de la *res publica*.

El segundo bloque de esta obra se titula *La persona ante el derecho de ayer y de hoy*. Está formado por artículos de diversa naturaleza disciplinar que abordan cuestiones de interés intemporal y permanente.

En el estudio de E. RICART-MARTÍ, que inicia esta parte de la obra, se analizan los rasgos más importantes del matrimonio romano y de otras situaciones afines como el concubinato, desde su paralelismo, semejanzas y diferencias, con los nuevos modelos de unión estable no matrimonial articulados, fundamentalmente, a través de la legislación autonómica española. L. RODRÍGUEZ ENNES dedica su reflexión a la

figura jurídica de la adopción desde la perspectiva de su devenir cronológico: pujanza en toda la historia de Roma por su importancia social y política, posterior desvanecimiento, que permanece durante toda la Edad Media y Moderna, y su reaparición en el siglo pasado en medio de un gran interés social, importante aparato legislativo y abundante doctrina judicial.

La clientela como cuestión poliédrica limítrofe, entre lo sociológico, lo jurídico y lo político es el objeto del trabajo que presenta J. C. TELLO. El autor expone, contemplando sus diversas variantes, la evolución de esta peculiar figura a lo largo de la historia de Roma, y su posterior proyección en los siglos siguientes llegando hasta nuestros días. Asimismo plantea y propone un concepto válido de clientela para todas las épocas. Acerca del Derecho consuetudinario familiar, concretamente en relación con la casa tradicional gallega como figura central del mismo, trata el artículo de R. RODRÍGUEZ MONTERO en donde se analiza una serie de instrumentos surgidos en torno a ella para su conservación, continuidad e indivisibilidad, según el proceso normativo operado en Galicia.

Sobre el controvertido tema del matrimonio entre personas del mismo sexo y sus numerosos problemas jurídicos anexos, como la filiación derivada de reproducción asistida o la adopción conjunta por cónyuges homosexuales, enfocado desde la perspectiva de la protección de los menores, se desarrolla la investigación de A. VELA. De indudable actualidad, desde el Derecho internacional privado, es el trabajo de A. RODRÍGUEZ BENOT, que versa sobre el tratamiento del estatuto personal a la luz de la multiculturalidad, atendiendo a las opciones legislativas que se refieren a la nacionalidad como circunstancia voluble, y a la residencia habitual como criterio políticamente integrador, así como sus repercusiones en la elaboración de un Derecho comunitario europeo de familia.

La ciudadanía en la actualidad: un valor jurídico inacabado es el título del tercer bloque que culmina esta obra.

R. VALPUESTA, desde una perspectiva feminista, aborda el binomio ciudadanía-diversidad basándose en la experiencia de los movimientos de mujeres para la conquista de la ciudadanía y sus logros, tanto en el ámbito normativo cuanto en el doctrinal, subrayando la gran tarea pendiente que resta hasta llegar a una ciudadanía real, suficientemente recogida en el Derecho positivo. En relación con la protección de los menores C. VILLAGRASA reflexiona en torno a sus derechos bajo el prisma de la Convención sobre los Derechos del Niño, y otras perspectivas legislativas, entre las que destaca, fundamentalmente, la propuesta de la autonomía catalana sobre una regulación integral sobre los derechos y oportunidades de la infancia y la adolescencia.

De la ciudadanía democrática y la integración social a través del ejercicio multicultural de los derechos fundamentales, se ocupa B. ALAÉZ en un trabajo en donde también analiza detalladamente los límites, en sus diferentes ámbitos, al ejercicio de ese multiculturalismo con el objeto de preservar el carácter democrático y nacional de la ciudadanía. A. ARIAS, sobre la base de la comparación jurídica con el Derecho norteamericano, plantea el conflicto entre la solicitud de la nacionalidad y la ideología antidemocrática de los solicitantes.

Desde el Derecho tributario y tomando como punto de partida el art. 31.1 de la Constitución Española, J. RAMOS analiza la interpretación del mismo por parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, fundamentalmente en relación con la objeción de conciencia en el ámbito fiscal y el principio de capacidad económica como modelo de distribución de la carga tributaria entre los ciudadanos.

Finalmente, el artículo de F. ANDRÉS cierra este creativo mosaico con un análisis sobre la ciudadanía romana como posible modelo cosmopolita, concepto ampliamente discutido en la filosofía política contemporánea, enlazando en cierta manera con las investigaciones iniciales de la obra. La experiencia de la historia, como conclusión, podría servir para valorar mejor las posibilidades y los problemas de este preciado derecho en el contexto europeo actual.

Todas las opiniones expuestas en esta sede gozan del interés general porque profundizan en el conocimiento de nuestra realidad jurídica y social, tanto la nacional como la europea que son al fin y al cabo la misma realidad, y cuya envergadura es tal que ha sido, y seguirá siendo, objeto de atención y preocupación a lo largo de todos los tiempos.

Es para mí una alegría y un honor escribir este prólogo. Tras muchísimos años de gestión universitaria, experiencia enriquecedora y fructífera que ha ocupado la mejor parte de mi vida académica, y algún otro tiempo dedicado a otras facetas profesionales relacionadas con el Derecho, he recibido el encargo de escribir unas páginas de introducción a esta obra colectiva. La misma es el resultado de un esfuerzo investigador desarrollado en el marco del proyecto I+D del MEC «Derecho, persona y ciudadano en la experiencia histórica y contemporánea» del que el profesor B. PERIÑÁN, esencial colaborador desde los inicios de mi andadura en la Universidad Pablo de Olavide, es principal investigador, editor y participante y al que quiero felicitar de corazón por ser el impulsor, el alma en una palabra, de esta publicación en la que ha puesto tanta imaginación como trabajo en proporción equivalente. No suele ser fácil concitar voluntades colectivas, individualidades diversas, y... plazos existentes, muchas veces casi imposibles de cumplir.

No quiero acabar estas líneas sin felicitar también a todos los participantes que están ofreciendo a la comunidad científica muchas, e

intrínsecamente valiosas, aportaciones que estoy segura abrirán nuevas perspectivas a consecuentes líneas de investigación. Quiero asimismo agradecer a la prestigiosa editorial jurídica Marcial Pons su apuesta por esta obra que denota su sensibilidad a la importancia de los temas tratados.

Ya se encargará la crítica de calibrar si este *Derecho, persona y ciudadanía: una experiencia jurídica comparada* ha dado los buenos frutos que los autores esperan. De momento, yo puedo dar fe de que sus autores han tenido en cuenta esa visión y misión de servir al Derecho de hoy y de mañana ofreciendo resultados claros y, sobre todo, constructivos sobre los temas que se han abordado en esta obra. Lo que pueda ser del Derecho de personas en el futuro lejano no lo sabemos, pero de lo que es en nuestro presente y de lo que será en nuestro futuro inmediato en este terreno y en la configuración jurídica de la ciudadanía, hay muchas cuestiones tratadas en las páginas que siguen.

Carmen VELASCO
Universidad Pablo de Olavide

**LA CIUDADANÍA EN EL MUNDO ANTIGUO:
BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA CATEGORÍA JURÍDICA**

PERCORSI DELLA CITTADINANZA ROMANA DALLE ORIGINI ALLA TARDA REPUBBLICA

Francesca LAMBERTI
Universidad del Salento

SOMMARIO: I. IL CITTADINO E LA CITTÀ-STATO.—II. IL *CIVIS* NELLA CITTÀ.—III. L' «ASTRATTO» E IL «CONCRETO» DEL CITTADINO ROMANO.—IV. ROMA E I RAPPORTI CON L'ESTERNO FRA LA CADUTA DELLA MONARCHIA E L'ULTIMO SECOLO DELLA REPUBBLICA.—V. LA POLITICA ROMANA DI COLONIZZAZIONE.—VI. «IUS LATII», «IUS ADIPI-SCENDAE CIVITATIS PER MAGISTRATUM» E «MUNICIPALIZZAZIONE» NELLA TARDA REPUBBLICA.—VII. DOPPIA CITTADINANZA E *PATRIA COMMUNIS*.—VIII. BIBLIOGRAFIA COMMENTATA.

RIASSUNTO: In questo lavoro si affronta il processo di ampliamento della romanità nella Repubblica romana dal punto di vista della cittadinanza, sott'olineando l'importanza della *civitas* come strumento per l'espansione di un sistema politico e, in definitiva, del Diritto come base della cittadinanza.

PAROLE CHIAVE: Roma, cittadinanza, romanità, Repubblica romana.

ABSTRACT: This paper addresses the process of extension of the *romanitas* in the Roman Republic from the perspective of Roman citizenship, stressing the importance of the *civitas* as a tool for expansion of a political system and, ultimately, the relevance of Law as the basis of citizenship.

KEYWORDS: Rome, citizenship, *romanitas*, Roman Republic.

I. IL CITTADINO E LA CITTÀ-STATO

Uno dei motivi del fascino esercitato da Roma antica sulle epoche successive è rappresentato dal carattere di unicità, ovvero originalità, di tante delle istituzioni sociali, politiche e giuridiche, prodottesi nel corso della sua vicenda storica. Peculiare di Roma, benché progressivamente applicato ad un novero amplissimo di realtà civiche nel bacino del Mediterraneo, è, fra l'altro, il modello cittadino sviluppatosi nella concreta esperienza della irradiazione di Roma in Italia¹.

Alle proprie origini la «città-stato» Roma² non presenta sostanziali differenze rispetto alle *poleis* del mondo greco e magnogreco, etrusco e latino. Una comunità dotata di autonomia di governo, cementata da rituali di natura religiosa e politica comuni, fondata su vincoli e consuetudini di tipo domestico e civile che ne materiano la continuità. In tale contesto si origina lo statuto di un cittadino-soldato, con i connessi obblighi militari e tributari, ma anche l'accesso ad una serie di facoltà implicanti la partecipazione alla vita istituzionale della città-stato.

In realtà il rapporto fra ascesa di Roma ed elargizione della *civitas* non può dirsi sempre lineare. L'attribuzione della cittadinanza romana infatti, nella prima fase dell'espansione romana, sarebbe stata vista in prevalenza come una forma di sottrazione di autonomia alle comunità destinatarie della stessa: Roma, una città-stato fra le altre, imponeva il proprio modello (o per via di incorporazione, o attraverso altri meccanismi istituzionali) alle popolazioni assoggettate. Fra III e II secolo, con la penetrazione di Roma in Italia, la qualità di *civis Romanus* avrebbe gradualmente acquisito attrattiva. Sino a divenire, se teniamo fede alle fonti, addirittura obiettivo di sotterfugi e frodi alla legge. La lettura della vicenda della *civitas Romana*, così come

¹ Di un modello «moltiplicabile su vasta scala e in un ambito territoriale molto ampio» parla, ad esempio L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione nella «civitas Romana»*, Roma, La Sapienza Editrice, 2000, p. 86, con un'impostazione certo relativa all'aspetto della cittadinanza *sine suffragio*, ma ben applicabile, *lato sensu*, anche al «modello» romano di città-stato. Riflessioni importanti, quanto alla differenza fra *polis* e *civitas*, da ultimo in G. CRIFÒ, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 23-31. Meno discontinuista la posizione, sul punto, di H. J. WOLFF, «Polis und civitas», in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Romanistische Abteilung)* (=«ZSS.»), 95, 1978, pp. 1-23, part. pp. 6 ss.

² La scelta di valersi dell'espressione città-stato avviene nella consapevolezza dei limiti insiti nell'applicazione di una categoria concettuale moderna all'esperienza antica. Si rinvia, per tutti, alle lucide precisazioni sul punto di F. DE MARTINO, *Il modello della città-stato*, in *Storia di Roma 4. Caratteri e morfologie*, dir. A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE, Torino, Einaudi, 1989, pp. 433-458 (=Id., *Diritto economia e società nel mondo romano 2. Diritto pubblico*, Napoli, Jovene, 1996, pp. 473-498).

quella del progressivo assurgere di Roma a potenza imperialistica, non è lineare, né semplice. Se ne può fornire pertanto solo qualche pennellata impressionistica, tendando di cogliere alcune linee della relativa vicenda storica.

II. IL CIVIS NELLA CITTÀ

Come in tutte le realtà antiche configurabili come città-stato, l'appartenenza — anche in Roma — fonda l'accesso a determinate possibilità. Esse vengono assommandosi nel corso dell'età repubblicana, con il progressivo prender forma e stabilizzarsi delle istituzioni della *res publica*.

Alle origini della città appare fondamentale l'appartenenza ad una *gens*: nonostante le divergenti prese di posizione degli studiosi sul punto³, sembra oramai accolto che le «genti» siano formazioni precittadine, aggregazioni «eponime» di persone che si riconoscono in un (mitologico o reale) ascendente comune⁴. Quali formazioni autonome esse disponevano di propri culti, di proprie assemblee e di propri statuti (*decreta*)⁵. A partire dall'VIII sec. a.C., le *gentes* avrebbero preso a cedere una parte della propria autonomia per dare vita progressivamente alla città-stato Roma: eventuali «nuove» *gentes* che, dopo l'iniziale sinecismo, avessero avuto intenzione di insediarsi in Roma, vi sarebbero state accolte per «incorporazione»⁶. In questo periodo è verosimile che ad esser soggetti di diritto — e cittadini a tutti gli effetti, dopo il consolidamento della città — fossero solo i capi delle *gentes* (*patres gentis*) e i membri liberi affiliati ai *patres*.

Le fonti riferiscono del delinarsi, nel passaggio dalla monarchia alla repubblica, del conflitto fra *patres* (discendenti delle antiche *gentes*) e *plebs* (formazione sociale che si definisce solo «in negativo», comprensiva di tutti coloro che non hanno la qualità di *patricii*)⁷. Nonostante le minori prerogative riservate alla plebe, la discordia è

³ Esauriente panoramica in F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 1², Napoli, 1972, pp. 42 ss.; G. FRANCIOSI, *Clan gentilizio e strutture monogamiche*⁶, Napoli, Jovene, 1999.

⁴ Sintesi da ultimo in F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*. 1. *Einleitung, Quellenkunde, Frühzeit und Republik*, München, Beck, 1998, pp. 196-201.

⁵ CINCIO in FESTO, *Sul significato delle parole* 83 LINDSAY; CICERONE, *Topica*, 6,29.

⁶ Sull'accettazione della *gens Claudia*, capeggiata da Atta Clausus, LIVIO, *Storia di Roma* II,16,4-5; DIONIGI DI ALICARNASSO, V,40,3-5. M. HUMM, «I fondamenti della Repubblica romana. Istituzioni, diritto, religione», in *Storia d'Europa e del Mediterraneo. Il mondo antico*. 3. *L'Ecumene romana*. 5. *La res publica e il Mediterraneo*, Roma, Salerno Editrice, 2008, pp. 467-520. Sull'«incorporazione» come metodo di estensione della *civitas*, *infra*, nel n. 4.

⁷ A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, Napoli, Liguori, 1974, pp. 68 ss. Panoramica delle diverse ipotesi sulle origini della plebe in M. HUMM, *I fondamenti*, cit., n. 3.

interna alla città: sia pure «di diritto minore» i plebei sono pur sempre *cives*⁸.

Dalla caduta della monarchia la plebe rappresenta un elemento dinamico all'interno del *populus Romanus*, teso a rimuovere i meccanismi che lo escludono dal governo, dalle massime cariche religiose e dalle assegnazioni di terra⁹.

E' a partire da tale momento che un nuovo tipo di appartenenza, quella all'esercito¹⁰, fonda la progressiva «emancipazione politica» e parificazione dell'elemento plebeo al patriziato — e, in ultima analisi, il «nuovo» *status* di cittadino di pieno diritto. La necessità della classe dirigente romana, nel v e nel iv sec. a.C., di fare ricorso anche alla plebe per la composizione dell'esercito¹¹, consente a quest'ultima di affermare progressivamente le proprie istanze.

L'esercito — originariamente suddiviso in un corpo di cavalleria, gli *equites*, e in uno di fanteria, la *classis*—¹² ci viene descritto nelle fonti, nella sua forma matura (risalente verosimilmente all'epoca del conflitto contro Veio, o a quella dell'invasione gallica), come strutturato in cinque classi di fanteria¹³. La ripartizione della popolazione (maschile) in centurie

⁸ Su questo mi sembra, nonostante il dissidio (fondato anche sulla diversa rilevanza attribuita alle pratiche economico-sociali di patriziato e *plebs*) fra F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 1², Napoli, Jovene, 1972, pp. 75-79, 252-258 (che vuole la plebe come «parte della città», anche se con diritti e prerogative inferiori) e A. GUARINO, *La rivoluzione*, cit., pp. 121-134, 300-305 (che reputa i plebei *Romani* non *Quirites*, esclusi dalla fruizione di un diritto — privato — accessibile ai soli patrizi), non vi sia disaccordo sostanziale fra gli studiosi. Ai *patres* era riservato (sino al 445 a.C.) il *connubium* e il monopolio di *imperium* e *auspicia*; la plebe aspirava, ma all'interno della città, alla parificazione sociale e giuridica: F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte* 1, cit., pp. 232-234.

⁹ F. DE MARTINO, *La costituzione della città-stato*, in *Storia di Roma* 1. *Roma in Italia*, dir. A. MOMIGLIANO, A. SCHIAVONE, Torino, Einaudi, 1989, pp. 357-361.

¹⁰ Sulla problematica in questione si v. part. i saggi di E. GABBA, *Esercito e società nella tarda repubblica romana*, Firenze, La Nuova Italia, 1973; V. GIUFFRÈ, *Letture e ricerche sulla «res militaris»*, vol. 1, Napoli, Jovene, 1996; G. BRIZZI, *Il guerriero, l'oplita, il legionario. Gli eserciti nel mondo classico*, Bologna, Il Mulino, 2002, pp. 29-136.

¹¹ Efficace sintesi, per tutti, in M. HUMM, *I fondamenti*, cit., n. 3.

¹² AULO GELLIO, X, 15,4 e VI, 13,1-2 («*Classici* erano detti [in antico] non tutti coloro che erano iscritti nelle classi, ma gli uomini della sola prima classe, che erano stati censiti per un patrimonio di centoventicinquemila assi o più; erano invece chiamati *infra classem* quelli della seconda classe e di tutte le altre classi successive, censiti per un patrimonio inferiore a quello anzi detto»); FESTO, *Sul significato delle parole*, 48-49 LINDSAY; A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe*, cit., pp. 114-118; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione* 1², cit., pp. 326-330; F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, 1, cit., p. 226.

¹³ Il collegamento fra la struttura centuriata matura e l'introduzione del censo (tradizionalmente fissata al 443 o 434 a.C., sulla base della testimonianza di ZONARA, 7,19) è da tempo acquisito nella storia degli studi: Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* 2,1³, Leipzig, Hirzel, 1881, pp. 331-332; G. PIÉRI, *L'histoire du cens jusqu'à la fin de la République romaine*, Publications de l'Institut de droit romain de l'Université de Paris, XXV, Paris, 1968, pp. 125-138; v. da ultimo E. LO CASCIO, *Il census a Roma e la sua evoluzione dall'età «serviana» alla prima età imperiale*, in «MEFRA», 113, 2001, pp. 565-603.

all'interno delle diverse classi è effettuata in base alla ricchezza posseduta. I cittadini (più ricchi) appartenenti alle prime classi sono obbligati a procurarsi un armamento più costoso, laddove su quelli delle classi inferiori incombono spese minori, dato l'armamento più leggero cui sono tenuti¹⁴.

A partire dalla «riforma oplitica» (verificatasi fra la fine del VI e l'inizio del V sec. a.C.)¹⁵ si afferma il principio della c.d. «eguaglianza geometrica»¹⁶. Dovendo, per poter partecipare all'esercito, dichiarare le ricchezze possedute, si impone infatti la regola per cui chi dispone di un reddito più elevato è tenuto ad assumere maggiori oneri in battaglia (armandosi meglio e prendendo parte al maggior numero di campagne belliche, ma anche contribuendo col proprio patrimonio alle necessità economiche collegate alla guerra). Oltre agli oneri si accede tuttavia ad onori¹⁷. Dal momento in cui la «costituzione centuriata» si stabilizza (fra fine del V e inizio del IV sec. a.C.) diviene infatti realmente possibile (ed è consistente con il dato rilevabile dalle fonti) la partecipazione politica della plebe (in particolare delle fasce abbienti) ai destini della *res publica*, dato che quello che è il corpo militare in tempo di guerra (*exercitus centuriatus*), in tempo di pace viene radunato come assemblea politica suprema della città (*maximus comitiatus*), per prendere (o meglio: approvare) decisioni di importanza costituzionale per la *res publica*.

La ripartizione dei cittadini in classi di censo, realizzata in base al reddito e condotta, a partire dalle *leges Liciniae Sextiae*, dai censori,

¹⁴ LIVIO, I,43,1,9; in parte diversa la descrizione dell'armamento in DIONIGI DI ALICARNASSO, IV,16-17.

¹⁵ Sulla datazione per tutti F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte* 1, cit., pp. 227-228. La leva militare (*dilectus*), sin da alta antichità, è effettuata sulla base di 'liste di coscrizione': ogni cittadino maschio, compiuti i 17 anni, viene inserito nelle liste in esame. Originariamente la probabilità della chiamata alle armi, per i nullatenenti, era assai ridotta (sia pur non nulla): a partire dalla media repubblica (le prime attestazioni sicure risalgono al 280, all'inizio della guerra contro Taranto: CASSIO EMINA, fr. 21 PETER: «Allora per la prima volta il proconsole Marcio (Filippo) armò i proletari»: OROSIO, 4,11; AGOSTINO, *La città di Dio*, 3,17; ENNIO, *Annali*, 6,183-185 VAHLEN²), e con la riforma manipolare e il passaggio dalla centuria alla legione come unità-base, si sarebbe fatto più frequente il ricorso anche agli strati sociali più bassi: E. GABBA, *La società romana fra IV e III secolo*, in *Storia di Roma. 2.1 La repubblica imperiale*, Torino, Einaudi, 1990, pp. 7-17, pp. 15-16. Sulla successiva incidenza delle riforme mariane (con l'allontanamento della composizione dell'esercito da quella dell'assemblea centuriata) E. GABBA, *Esercito e società*, cit., pp. 55-84; 107-174; L. DE BLOIS, *The Roman Army and Politics in the First Century B.C.*, Amsterdam, Gieben, 1987.

¹⁶ La presentazione fornita da Livio, Cicerone e Dionigi sarebbe invece «un ripensamento idealizzato, nel quale sono tenute in gran conto tanto la teoria aristotelica del rapporto fra capacità economica ed esercizio del potere politico quanto l'esperienza storica romana dell'età postgraccana»: E. GABBA, «Assemblee ed esercito a Roma fra IV e III sec. a.C.», in *Roma fra oligarchia e democrazia. Classi sociali e formazione del diritto in epoca medio-repubblicana*, Atti Copanello 28-31 maggio 1986, Napoli, E.S.I., 1998, pp. 41-86.

¹⁷ DIONIGI DI ALICARNASSO, IV,19,2-3; CICERONE, *La repubblica*, II,21,39. Sulla c.d. «eguaglianza geometrica» v. fra altri C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma*, tr. it. Roma, Editori Riuniti, 1982, dell'ed. Paris, Gallimard, 1979, p. 117; M. HUMM, *I fondamenti*, cit., part. n. 6.

era infatti funzionale tanto alla leva militare quanto al prelievo fiscale e alle operazioni di voto nei comizi. L'assemblea politica suprema, il comizio centuriato¹⁸, si fonda, a partire verosimilmente dai primordi del IV sec. a.C., su una struttura alquanto articolata: in essa ha maggior peso il voto degli appartenenti alla prima delle cinque classi di censo, unitamente al voto delle 18 centurie di cavalieri (praticamente la parte più ricca della cittadinanza), rispetto a quello delle restanti classi. Fra la seconda e la quinta classe di censo sono registrati infatti i cittadini abbienti, ma di ricchezza inferiore a quella posseduta dagli appartenenti alle 80 centurie della prima ed alle 18 di *equites*¹⁹. I comizi centuriati si riuniscono per l'elezione dei magistrati maggiori, la promulgazione di leggi di contenuto politico o *de bello indicendo*²⁰ e le decisioni in tema di giudizi capitali (*provocatio ad populum*). Il sistema è strutturato in modo tale che al voto accedano prima le centurie di *equites*, poi quelle degli appartenenti alla prima classe e poi, a scalare, le successive: se vi è accordo politico, formando le centurie dei cavalieri e quelle della prima classe già la maggioranza delle unità di voto di cui è composta l'assemblea, è spesso non necessario chiedere il parere delle classi successive²¹. Coloro su cui incombono maggiori oneri fiscali e relativi al combattimento in guerra hanno insomma anche l'ultima parola sulle questioni 'capitali' nel governo della *res publica*.

Nonostante l'introduzione della riforma manipolare dell'esercito e, nel 406 a.C., del soldo per i militari (in collegamento con il *tributum*), innovazioni che allontanavano la reale struttura dell'esercito dalla condizione patrimoniale dei cittadini, i comizi centuriati (e, in misura minore, anche quelli tributi²²) continuarono ad essere rigi-

¹⁸ Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* 3.1³, Leipzig, Hirzel, 1887, pp. 244-295; L. R. TAYLOR, *Roman Voting Assemblies from the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar*, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1966; AAVV, *Demokratie in Rom? Die Rolle des Volkes in der Politik der römischen Republik* (hrsg. von M. JEHNE), Stuttgart, Steiner, 1995; A. YAKOBSON, *Elections and Electioneering in Rome. A Study in the Political System of the Late Republic*, Stuttgart, Steiner, 1999.

¹⁹ Livio, I,43,1,9. Per dettagli si rinvia al lavoro di M. HUMM, *I fondamenti*, cit., part. nel n. 6.

²⁰ Si v. per questo G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano, Società Editrice Libraria, 1912, pp. 57-58; da ultimo U. PAANANEN, «Legislation in the "comitia centuriata"», in *Senatus Populusque Romanus. Studies in Roman Republican Legislation*, Helsinki-Rome, Institutum Romanum Finlandiae, 1993, pp. 9-73.

²¹ Non sembra che il sistema abbia mutato equilibrio, nella sostanza, neppure quando — nel corso del III sec. a.C. — le centurie della prima classe, da 80, furono «ribassate» a 70, per renderle corrispondenti al numero delle tribù (dissonanti testimonianze in LIVIO I,43,12 e CICERONE, *La repubblica*, I,22,23): sarebbe stato infatti sufficiente procurarsi i voti consonanti di altre otto centurie delle altre classi (alla prima era associata quella dei *fabri et tignarii*) per ottenere in ogni caso la maggioranza. Discussione di fonti e letteratura in F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., pp. 394-395.

²² Questi ultimi raccoglievano la popolazione distribuita in tribù. Eleggevano magistrati minori (gli edili curuli e i questori) e votavano leggi c.d. tribute (il cui numero,

damente regolati da criteri censitari, grazie ai quali i ceti egemoni conservavano i propri «privilegi di casta»²³. Anche nei concili plebei, strutturati in base a criteri di residenza in Roma (sulla base della tribù), analogamente ai comizi tributi, contava ovviamente l'elemento patrimoniale: essendo il criterio di distribuzione (come per i comizi tributi) quello della 'residenza' nelle tribù territoriali, favoriti erano i proprietari terrieri, censiti nelle tribù rustiche (che, nel sistema maturo, occupavano 31 delle 35 tribù totali)²⁴. Essi tuttavia data la loro origine, in funzione della tutela degli interessi della plebe, avevano un tenore maggiormente democratico. Rimasero però limitati nei loro poteri decisionali: oltre ad esprimere, nel loro seno, i magistrati plebei (tribuni ed edili plebei), votavano infatti provvedimenti (i *plebiscita*) che vincolavano la sola plebe (e ciò sino al 287 a.C., data di emanazione della *lex Hortensia*, con la quale finalmente si estese l'ambito di applicazione dei plebisciti all'intera cittadinanza²⁵), e riguardavano per lo più materie di diritto privato e processuale²⁶. Nonostante dalla media repubblica la maggioranza dei provvedimenti legislativi promanesse dai comizi tributi e dai concili plebei²⁷, i comizi centuriati conservarono la loro posizione di preminenza (per via dell'elezione dei magistrati maggiori): e in essi a contare erano le clientele della oligarchia senatoria, che riuscì ad esercitarvi, per tutto il corso della repubblica, ininterrotto influsso²⁸.

L'appartenenza al sistema censitario, si diceva, è funzionale fra l'altro alla corresponsione delle imposte. Il cittadino romano assume su di sé, in proporzione al censo, utili, ma anche una certa quota di

a fronte della ben più numerosa legislazione tramite *plebiscita*, pare sia stato di assai ridotta entità: G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., pp. 260, 263, 301; F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., p. 402). Anche in questo caso la decisione comiziale non era rilevata per *capita*, ma *tributum*. Approfondimenti, per tutti, ancora in M. HUMM, *I fondamenti*, cit., nn. 6 e 8.

²³ CICERONE, *La repubblica* II,22,39: «... occorre sempre tener fermo, nel governo (della città), questo principio: che la maggioranza dei cittadini non abbia il maggior potere decisionale».

²⁴ L. R. TAYLOR, *Roman Voting Assemblies*, cit., *passim*; M. HUMM, *I fondamenti*, cit., n. 8.

²⁵ GAIO, *Istituzioni* I,3; LELIO FELICE in GELLIO, XV,27,4; PLINIO, *Storia naturale*, 16,37. Discussione da ultimo in W. KUNKEL-R. WITTMANN, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*. 2. *Die Magistratur*, München, Beck, 1995, pp. 607-611.

²⁶ K. SANDBERG, «*The concilium plebis as a legislative body*», in *Senatus Populusque*, cit., pp. 74-96.

²⁷ J. BLEICKEN, *Lex Publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik*, Berlin-New York, De Gruyter, 1975, pp. 100-177; F. CASAVOLA, «*La legislazione comiziale e l'editto*», in *Storia di Roma* 2.1, cit., pp. 524-534.

²⁸ C. NICOLET, *Il mestiere*, cit., p. 406, per cui, in forza delle distinzioni indicate, si sarebbe delineata «una distinzione sempre più netta tra una minoranza di famiglie e di cittadini chiamata a partecipare realmente alla totalità della vita civica [...] e una massa la cui sfera di partecipazione era infinitamente più ristretta».

oneri. E' questo il caso della sottoposizione alle imposte²⁹, indirette — come la tassa sulle manomissioni (nella misura del 5 per 100 del valore di ogni schiavo liberato), introdotta nel 357 a.C.—³⁰, ma soprattutto dirette, come il *tributum*: una contribuzione richiesta ad ogni cittadino in proporzione al censo posseduto³¹, e stabilizzatasi a partire dalla decisione del senato, nel 406 a. C. (in occasione della guerra con Veio) di attribuire uno *stipendium* ai militari³². Il tributo non riveste i caratteri di un'imposta periodica, come le moderne³³: si trattava di un versamento richiesto *ad hoc* ai cittadini, nell'imminenza di imprese belliche, e laddove il bottino e le contribuzioni imposte ai vinti non fossero sufficienti³⁴. Ma la frequenza degli scontri sostenuti da Roma comportava naturalmente la necessità di apporti anche ingenti ad opera dei *cives* nelle casse dell'erario, come ad esempio nel corso della seconda punica³⁵. Era dunque visto con sollievo il caso in cui, in un dato anno, non fosse necessario versare il tributo³⁶. Particolare entusiasmo dovè suscitare, pertanto, la decisione del senato, nel 167 a.C., di far cessare le riscossioni del *tributum*, a seguito della conclusione del *bellum Macedonicum* che aveva fruttato a Roma un ricchissimo bottino³⁷. La risoluzione, benché di lungo periodo, non consisté in

²⁹ Per tutti C. NICOLET, *Il mestiere*, cit., pp. 188-263; T. SPAGNUOLO VIGORITA-F. MERCOGLIANO, sv. *Tributi (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto* (=«ED.»), 45, Milano, 1992, pp. 85-105.

³⁰ Sulla *lex Manlia de vicesima manumissionum* e sulle circostanze politiche della sua emanazione A. GUARINO, «Lex Manlia de vicesima (Frustula Iuris Romani II)», in *Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche della Società Nazionale di Scienze lettere ed arti di Napoli*, 92, 1981, pp. 193-195 (=Id., *Pagine di diritto romano* 3, Napoli, Jovene, 1994, pp. 255-259); L. RODRÍGUEZ ALVAREZ, «Algunas notas en torno a la “lex de vicesima hereditatum”», in *RIDA*, 28, 1981, pp. 213-246.

³¹ VARRONE, *La lingua latina*, V,36,181: «Il tributo è così denominato per via delle tribù: infatti il denaro che si esigeva dal popolo veniva riscosso, da ciascun cittadino secondo l'iscrizione alla tribù, in proporzione al censo».

³² LIVIO, IV,59,11; 5,4,3 ss.; DIODORO, XIV,16,5; GIOVANNI LIDO, *Sui magistrati*, I,44.

³³ Un prelievo fiscale di natura «continuativa» si afferma solo in età imperiale, e nei riguardi della popolazione provinciale, con imposte fondiari (*stipendium vel tributum*) e prelievi *pro capite*: F. GRELLE, *Stipendium vel tributum*, Napoli, Jovene, 1963; T. SPAGNUOLO VIGORITA-F. MERCOGLIANO, sv. *Tributi*, cit., pp.98-101.

³⁴ Così nel 394 a. C., quando il pagamento fu imposto ai Falisci «così che il popolo romano fosse esentato dal *tributum*» (LIVIO V,27,15); oppure nel 306 a.C., a seguito della vittoria di Q. Marcio Tremulo sui Sanniti [PLINIO, *Storia naturale*, XXXIV,6(11),23]. «Roma ha avuto la tendenza, come tutte le città, ad esportare il proprio fiscalismo tutte le volte che ha potuto»: C. NICOLET, *Il mestiere*, cit., p. 189.

³⁵ Così nel 210, quando i consoli richiesero ai privati una contribuzione straordinaria «secondo la qualifica censitaria e l'ordine al quale appartenevano» per poter mantenere la flotta e i rematori: in tale occasione Livio sottolinea il malcontento della popolazione, «ormai stremata da tanti anni di versamento del tributo» (LIVIO, XXVI,35,4). C. NICOLET, *Il mestiere*, cit., pp. 211-213.

³⁶ Ovvero questo venisse «rimborsato» a seguito di un bottino particolarmente soddisfacente: pare esser stato, ad esempio, il caso del trionfo di Gneo Manlio Vulsone sui Galli d'Asia (LIVIO, XXXIX,7,5).

³⁷ PLINIO, *Storia naturale* XXXIII,3(17),56; VALERIO MASSIMO, IV,3,8; PLUTARCO, *Emilio Paolo*, 38,1; CICERONE, *Dei doveri*, II,22,76.

una 'abolizione' definitiva: le autorità potevano in ogni momento, in caso di necessità, decidere di farvi nuovamente ricorso. Così sarebbe avvenuto, infatti, nel quadro delle guerre civili, nel 43 a.C.: ma già con Cesare si era assistito ad ingenti prelievi fiscali a Roma e in Italia³⁸. Il cittadino romano che avesse possedimenti in provincia, d'altronde, spesso era tenuto al versamento dell'imposta per le proprietà *in solo provinciali*³⁹, non essendo dunque del tutto esente da obblighi contributivi. L'alleggerimento della pressione fiscale sui *cives* a seguito delle vittorie di Emilio Paolo dovè in ogni caso rappresentare, in una con la aumentata egemonia di Roma nel Mediterraneo, un fattore di emmentata attrattiva della *civitas* per buona parte dei Latini e dei *socii*. Non è, forse, una casualità se proprio nei decenni successivi al 167 si andò intensificando il dibattito sulla concessione della cittadinanza a tali categorie di soggetti⁴⁰.

Il *civis*, all'interno della *civitas*, possiede anche il c.d. elettorato passivo, può cioè aspirare ad essere eletto ad una magistratura cittadina. Anche per quel che concerne l'accesso alle magistrature, tuttavia, occorre disporre da un lato di un censo adeguato, che consenta l'ingresso nella prima classe⁴¹, e dall'altro di ricchezze che (essendo l'*honor* magistratuale gratuito) permettano al magistrato di sostenere le spese legate all'esercizio della sua funzione e di tenere uno stile di vita adeguato ad un pubblico funzionario⁴². A ciò deve aggiungersi la sostanziale ereditarietà che, almeno per le magistrature maggiori, si andò delineando sin dai primordi della repubblica, e che rappresentò, ancora per la media e tarda età repubblicana, uno dei principi centrali del funzionamento della vita politica⁴³.

Il cittadino romano obbedisce alle norme dell'ordinamento romano, e ovviamente può fruirne anche a proprio vantaggio, soprattutto per quel che attiene alla tutela dei diritti. Già le XII Tavole contenevano un embrione di regolamentazione dei giudizi privati, poi perfezionata mediante alcune *leges publicae*, nella veste procedurale delle *legis ac-*

³⁸ Se ne veda una panoramica in T. SPAGNUOLO VIGORITA-F. MERCOGLIANO, sv. *Tributi*, cit., pp. 96-98.

³⁹ Approfondimenti in J. BLEICKEN, «*In provinciali solo dominium populi Romani est vel Caesaris*». Zur Kolonisationspolitik der ausgehenden Republik und frühen Kaiserzeit», in *Chiron* 4, 1974, pp. 359-414; C. NICOLET, *Il mestiere*, cit., p. 191 e pp. 216-224; T. SPAGNUOLO VIGORITA-F. MERCOGLIANO, sv. *Tributi*, cit., pp. 98-104.

⁴⁰ Non convince l'*argumentum e silentio* usato da NICOLET, *Il mestiere*, cit., p. 216, secondo cui nelle colonie romane il *tributum* sarebbe stato ulteriormente richiesto, anche successivamente al 167 a.C.

⁴¹ C. NICOLET, «Le cens sénatorial sous la République et sous Auguste», in *Journal of Roman Studies (=JRS)*, 1976, pp. 20-36. *Infra*, nel § 3.

⁴² E. GABBA, *Del buon uso della ricchezza. Saggi di storia economica e sociale del mondo antico*, Milano, Guerini e associati, 1988, pp. 27-44; W. KUNKEL-R. WITTMANN, *Staatsordnung*, cit., p. 59.

⁴³ *Infra*, nel n. 3.

*tiones*⁴⁴. A partire dal III sec. a.C. si sarebbe poi affermata una nuova procedura, più adeguata ai tempi, l'*agere per formulas*⁴⁵. Originariamente garantita dai consoli, nonché dai loro delegati, poi forse dai *tribuni militum consulari potestate*, dalle *leges Liciniae Sextiae* in poi affidata alla magistratura pretoria (raddoppiata nel 242 a.C.)⁴⁶, la tutela dei diritti finisce per acquisire un ruolo di rilievo all'interno della vita cittadina (per venire poi esportata anche al di fuori di Roma città). Poiché era assente in Roma (se si prescinde dalla assai rudimentale raccolta di precetti rappresentata dalle XII Tavole) una codificazione dei diritti civili, si diffuse assai presto, fra i cittadini, la convinzione che il riconoscimento delle loro pretese giuridiche passasse attraverso lo strumento della tutela processuale⁴⁷. Così, ad esempio, in mancanza di una disciplina come quella contenuta negli artt. 1.574-1.612 del nostro Codice Civile (per non parlare delle leggi speciali) in tema di locazione, il locatore o il conduttore di un bene che intendessero far valere un diritto scaturente dal loro contratto dovevano rivolgersi al magistrato giurisdicente (all'epoca in cui avviene il riconoscimento giuridico della locazione, oramai il pretore) per ottenere tutela giudiziale della propria pretesa⁴⁸; era almeno in parte nell'arbitrio del magistrato la decisione se riconoscere o meno un'azione a tutela⁴⁹; era spesso possibile convincere la controparte ad un accordo extragiudiziale, in via di coazione indiretta, con la larvata minaccia di procedere giudizialmente nei suoi riguardi (segno, questo, del buon funzionamento del sistema processuale, anche sotto il profilo dell'esecuzione patrimoniale⁵⁰). Da un certo momento in poi buona parte del diritto privato romano si

⁴⁴ Azioni relative alle controversie fondamentali fra privati (quelle sul diritto di proprietà, sulla libertà, sull'eredità, sul diritto di credito scaturente da promesse solenni, sull'esecuzione forzata per debiti), impostate secondo formulari assai schematici e un rigido cerimoniale: sulle «azioni di legge» per tutti M. KASER-K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, München, Beck, 1996, pp. 25-148.

⁴⁵ Si trattava di un sistema processuale basato su modalità più agevoli ed elastiche di quello delle *legis actiones*, che consentiva la tutela di un ampio novero di diritti ed un più equilibrato contemperamento degli interessi dei contendenti. Si v. per la ricchissima letteratura e le fonti, ancora, M. KASER-K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., pp. 149-432.

⁴⁶ Sull'intera questione da ultimo T. C. BRENNAN, *The Praetorship in the Roman Republic* 1, Oxford, Oxford Univ. Press, 2000, pp. 34-57.

⁴⁷ Sul c.d. «aktionrechtliches Denken» che è, certo, atteggiamento della giurisprudenza romana, ma sicuramente non estraneo anche al cittadino non giurista, C.A. CANNATA, «Atto giuridico e rapporto giuridico», in *SDHI.*, 57, 1991, pp. 335-382; M. KASER-K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., pp. 233-234; M. TALAMANCA, sv. *Processo civile (diritto romano)*, in *ED*, 36, 1987, pp. 1-79.

⁴⁸ Sulla emersione della *locatio conductio* nell'esperienza giuridica romana, e sui profili costruttivi con questa connessi, per tutti R. FIORI, *La definizione della «locatio conductio». Giurisprudenza romana e tradizione romanistica*, Napoli, Jovene, 1999.

⁴⁹ Sui profili relativi all'arbitrio magistratuale F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., pp. 459-460.

⁵⁰ E. METZGER, «The current view of extra-judicial "vadimonium"», in *ZSS*, 117, 2000, pp. 133-178.

sarebbe evoluta grazie all'attività dei magistrati giudicanti, i pretori in particolare, ma anche gli edili curuli, per i profili affidati alla loro competenza⁵¹, ed i *praefecti* inviati in alcune realtà italiche. L'accesso ai meccanismi di tutela apprestati in Roma e da Roma nel resto d'Italia garantiva, sostanzialmente, l'accesso al diritto privato: esso fu, anche formalmente, aperto in Roma ai non cittadini a partire dal 242 a.C., con l'introduzione di un apposito *praetor peregrinus*⁵².

E tuttavia già alla fine del IV secolo a.C. l'apertura di Roma verso l'esterno — per via di necessità economiche — aveva ottenuto un significativo impulso grazie alla estensione della tutela giurisdizionale anche a *Latini* e *peregrini*⁵³: estensione non più oggetto di una concessione *ad hoc* (come nel caso del *commercium*), ma riguardante, all'interno della città di Roma, indistintamente tutti gli stranieri. Gli studiosi concordano sul fatto che già in questo periodo il magistrato cui era affidata l'amministrazione della giustizia, il (monocratico) pretore urbano, fornisse tutela anche alle pretese fatte valere, in Roma, da Latini o stranieri, sia fra loro che nei riguardi di *cives Romani*⁵⁴. Gli stranieri prendono a venir «protetti nell'ambito della giurisdizione romana in quanto tali, indipendentemente da un formale — ed umiliante, nell'ideologia antica — assoggettamento alla sovranità della città in cui lo straniero dimorava, come accadeva per i “*métoikoi*” greci, tenuti al pagamento del “*metoikion*” ed a munirsi di un “*prostátes*”»⁵⁵. Grazie a tale attività giurisdizionale si consolida un insieme di regole applicabili agli stranieri, e successivamente estese anche ai *cives*, che troverà il proprio culmine nella creazione, nel 242 a.C., di un nuovo magistrato, appunto il *praetor peregrinus*, incaricato di *ius dicere* in controversie in cui fossero coinvolti stranieri⁵⁶. Tali mutamenti istituzionali hanno luogo in un momento in cui Roma va egredendo i tradizionali confini della

⁵¹ Sulle azioni edilizie da ultimo C. BALDUS, «Una actione experiri debet»? Zur Klagenkonkurrenz bei Sachmängeln im römischen Kaufrecht», in *Orbis Iuris Romani* 5, 1999, pp. 20-83; L. GAROFALO, *Studi sull'azione redibitoria*, Padova, Cedam, 2000.

⁵² Per tutti T. C. BRENNAN, *The Praetorship*, cit., pp. 85-135; importante M. KASER, «Altrömisches Eigentum und “usucapio”», in *ZSS*, 105, 1988, pp. 122-164, part. pp. 146-153.

⁵³ Seguo, qui, M. TALAMANCA, «I mutamenti della cittadinanza», in *MEFRA*, 103, pp. 703-733, pp. 711-712.

⁵⁴ Un trattamento diversificato ipotizza, per i Latini (forse ammessi anche alle *legis actiones*) a fronte dei *peregrini* (per cui fu necessario prima utilizzare i mezzi propri della *coercitio* pretoria, *magis imperii quam iurisdictionis*, poi escogitare formulari giudiziari *ad hoc*, antesignani della procedura *per formulas*), già per fine V-inizio IV sec. a.C. WIEACKER, *Rechtsgeschichte*, cit., pp. 264-267; cfr. M. KASER-K. HACKL, *Das römische Zivilprozess*, cit., pp. 172-180; T. C. BRENNAN, *The Praetorship*, cit., pp. 85-89.

⁵⁵ M. TALAMANCA, Il diritto romano come fattore di unificazione nel mondo antico, in *Studi in memoria di Giambattista Impallomeni*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 405-435, p. 412.

⁵⁶ La datazione al 242 a.C. risulta da LIVIO, *Periochae* XIX; GIOVANNI LIDO, *Sui magistrati* I, 38 e 45; DIGESTO I, 2.2.28 (Pomp. *l.s. enchir.*). Th. MOMMSEN, *Staatsrecht* 2, 1³, cit., p. 196 e F. DE MARTINO, *Storia* 2³, cit., pp. 230-231 e ntt. ivi; T. C. BRENNAN, *The Praetorship*, cit., pp. 85-89.

città-stato antica, per porsi come centro di una rete di relazioni, prima dell'Italia centrale, poi dell'intera penisola, con ulteriori prospettive sul Mediterraneo, cui è funzionale la transizione verso forme più evolute di economia. La rete di traffici che va diffondendosi a partire dalla fine del IV secolo ha Roma come perno: in città affluiscono mercanti e operatori economici non solo dall'Italia, ma dall'intero bacino mediterraneo, e — al fine di stabilizzarne la presenza — è necessario assicurare loro regole certe e una loro stabile applicazione. Viene, praticamente, istituito un secondo pretore, con una sfera di competenza distinta da quella del pretore urbano, la cui giurisdizione, più sensibile alle istanze dell'esterno relative ai rapporti commerciali, finirà per influenzare pesantemente anche l'attività giurisdizionale di quest'ultimo⁵⁷.

Poco sappiamo, invece, delle possibilità riconosciute, per quel che riguarda la tutela processuale, ai non cittadini fuori di Roma, per l'epoca repubblicana⁵⁸: per *Latini* e *Italici* muniti di *commercium* l'accesso ai tribunali di diritto romano (anche fuori di Roma) era scontato; i *peregrini* esclusi dal 'principio di reciprocità' garantito dal *commercium* verosimilmente, laddove se ne fosse profilata la necessità, dovevano fare ricorso a un *patronus* cittadino romano per la tutela dei propri interessi in giudizio.

Per quanto ci è noto, il processo privato è un processo democratico, l'accesso alla tutela giuridica è garantito in modo indifferenziato a tutti i *cives*: mette appena conto di ricordare tuttavia che ha interesse a una tutela solo chi ha beni (e diritti) da far valere in giudizio; e che anche in questo ambito avrebbero giocato un ruolo le clientele fra appartenenti alle classi elevate, le eventuali disparità sociali fra le parti in causa e la possibilità di finanziare consulenti esperti di diritto a supporto delle proprie pretese⁵⁹. Senza contare che eventuali arbitrii

⁵⁷ F. SERRAO, *La «iurisdictio» del pretore peregrino*, Milano, Giuffrè, 1954; T. C. BRENNAN, *The Praetorship*, cit., pp. 85-89, pp. 108-135.

⁵⁸ Qualche indizio sussiste, per controversie fra Siculi e cittadini romani, per la Sicilia dell'età di Verre (che tuttavia rappresentava una *provincia*, e in quanto tale sottostava a regole organizzative in parti differenti da quelle delle regioni già da gran tempo romanizzate): se l'attore *civis* avesse convenuto in giudizio un Siculo «viene assegnato quale giudice un Siculo», se il convenuto fosse stato cittadino Romano «viene assegnato quale giudice un cittadino Romano»; «per tutti gli altri casi si è soliti scegliere i giudici dalla comunità di cittadini romani» (CICERONE, *Azione seconda contro Verre* 2,13,32). Discussione ampia in F. DE MARTINO, *Storia* 2^a, cit., pp. 380-387. Non chiara è invece la situazione per quel che attiene ai processi criminali, su cui assai rade sono le testimonianze. E' verosimile che, per evitare troppo elevati livelli di conflittualità, Roma lasciasse ai magistrati cittadini delle comunità locali, per quanto possibile, il compito di provvedere alla repressione, intervenendo solo nei casi più gravi. Dall'89 a.C. in poi il problema, per l'Italia peninsulare, sarebbe stato accantonato, con la raggiunta estensione della cittadinanza a Latini e *socii*, trovandosi invece soluzioni *ad hoc*, per le singole province, attraverso le rispettive *leges provinciae* (DE MARTINO, *Storia* 2^a, cit., pp. 388-392).

⁵⁹ CICERONE, *In difesa di Publio Quinzio*, I,4-5: «Se tu (scil. C. Aquilio Gallo), in quanto giudice, non intendi dare alcuna protezione alla solitudine e all'indigenza contro la potenza e il

di pretori disinvolti erano in grado di turbare l'equilibrio processuale stabilito nell'editto *perpetuum*, discostandosi dalle regole tramandate per piegarle a loro finalità personali⁶⁰.

Sotto il profilo della repressione criminale è di rilievo, in particolare, il diritto di *provocare ad populum*, ovvero di chiedere ad un comizio romano (verosimilmente il centuriato) di rivedere una sentenza di condanna capitale, oppure di paralizzare il magistrato dirigente la procedura criminale nell'applicazione del proprio potere di *coercitio*. Di esso godono soltanto i cittadini romani: la *coercitio* dei magistrati romani in ambito italico e successivamente, nelle province, per essere efficace non può essere sottoposta agli stessi limiti vigenti in Roma (o nei riguardi dei *cives*), onde i non Romani non godono della 'garanzia' costituita dalla *provocatio*.

Sancita definitivamente da una *lex Valeria* (verosimilmente del 300 a.C.⁶¹), la *provocatio ad populum* sarebbe stata estesa da tre leggi Porcie, intorno all'inizio del II sec. a.C.⁶², anche ad ipotesi di illegittima fustigazione, ed anche a cittadini fuori di Roma e a soldati nei riguardi del proprio comandante⁶³. Anche il diritto di *provocare ad populum* era visto, dall'esterno, come un privilegio: lo dimostra la (purtroppo assai lacunosa) disposizione della *lex repetundarum epigraphica* (c. 78) dal cui tenore si evince con un discreto margine di sicurezza che all'accusatore (sebbene forse solo di origine Latina) vittorioso di un cittadino romano in un processo per *repetundae* fosse concesso, quale premio, il diritto di *provocare ad populum*⁶⁴, oltre che la *vacatio militiae* e l'esenzione dai *munera* nella città di provenienza. Norme del genere avevano ovviamente lo scopo di «adescare» i non *cives*, otte-

redito, se, davanti al consiglio che tu presiedi, le cause vengono giudicate secondo la ricchezza e non secondo la verità, ciò significa certo che nello Stato non esiste più né moralità né onestà; che non esiste più per i deboli consolazione nell'autorità e nell'integrità dei giudici».

⁶⁰ Sugli abusi compiuti da Verre nella sua propretura in Sicilia, C. NICOLET, *Il mestiere*, cit., pp. 429-432; circa la *lex Cornelia de edictis*, che nell'81 a.C. avrebbe prescritto ai pretori di tener fede all'editto da loro pubblicato all'inizio dell'anno di carica, P. PINNA PARPAGLIA, *Per una interpretazione della «lex Cornelia de edictis praetorum» del 67 a.C.*, Sassari, Moderna, 1987; Id., «Lex Cornelia de edictis», mutui feneratori, certezza del diritto», in *Labeo* 38, 1992, pp. 372-377.

⁶¹ Sul dibattito circa le leggi *de provocatione* per tutti B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 31-46, che conclude però per l'autenticità anche delle due più antiche, la *lex Valeria* del 509 a.C. (CICERONE, *La repubblica*, II,53; DIONIGI DI ALICARNASSO, V,19,4; LIVIO, II,8,2) e la *lex Valeria Horatia* del 449 a.C. (CICERONE, *La repubblica*, II,54).

⁶² Benché del tutto incerta sia la data della terza, laddove la tradizione colloca le prime due intorno al 195 a.C.: si v. la discussione ancora in B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 70-75.

⁶³ W. KUNKEL-R. WITTMANN, *Staatsordnung*, cit., pp. 166-171.

⁶⁴ Per tutti A. LINTOTT, *Judicial Reform and Land Reform in the Roman Republic*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 10-15. Ampia discussione di fonti e letteratura, altresì in B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 120-121.

nendone la partecipazione ad alcuni degli ideali politici e morali della *res publica*, con la rassicurazione di un loro trattamento più mite nei processi criminali in cui dovessero eventualmente trovarsi coinvolti.

In sintesi può dirsi (ed è stato detto) che «solo il cittadino romano può votare nei comizi e, in essi, decide della pace e della guerra, dell'abolizione e della concessione della libertà, della creazione dei magistrati, dell'esercito, dei tributi, della vita dei concittadini, degli onori e dei trionfi. Egli è legittimato all'esercizio delle azioni popolari, direttamente davanti alle *quaestiones*, attraverso i magistrati dotati dell'*ius rogationis* davanti ai comizi. Egli solo può essere eletto alle magistrature, godere dell'*ius militiae*, entrare nei collegi sacerdotali, prendere gli auspici, fondare una tomba. A lui spettano il diritto di *provocare ad populum*, di essere esente da pene corporali, di sottrarsi mediante *exilium* alla pena capitale»⁶⁵. L'insieme di tali prerogative sarebbe divenuto appetibile, a partire dagli inizi del II sec. a.C., per buona parte di coloro che, in ambiente Italico, ne risultassero esclusi.

III. L' «ASTRATTO» E IL «CONCRETO» DEL CITTADINO ROMANO

Al di là delle possibilità «teoriche» cui dà accesso la cittadinanza romana, un cenno va fatto a limiti e discriminazioni interne allo stesso corpo cittadino. La cittadinanza infatti non rende eguali, fra *cives* sussistono, sin da alta antichità, rilevanti differenze di *status*. Né esiste, come nelle moderne costituzioni democratiche, un riconoscimento «formale» di una teorica *égalité* fra cittadini. La Roma protorepubblicana conosce un divario di posizioni e diritti, si è visto, fra gli appartenenti alle *gentes* patrizie e la parte plebea della popolazione⁶⁶: il *populus Romanus Quiritium* si sostanzia, è vero, di entrambe le componenti, ma una delle due gode di possibilità ben più ristrette a fronte dell'altra

⁶⁵ G. CRIFÒ, sv. «Cittadinanza (diritto romano)», in *ED*, 7, 1960, pp. 127-132, p. 131. Sul *ius sepulchri* GAIO, *Istituzioni*, II,4; F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux romains*, Milano, Giuffrè, 1963; S. LAZZARINI, «Sepulchrum familiare» e «ius mortuum inferendi», in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, V, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 217-237; ID., *Sepulchra familiaria. Un'indagine epigrafico-giuridica*, Padova, Cedam, 1991. Su religione ed accesso ai sacerdoti, J. NORTH, «Early Rome», in *Religions of Rome. I. A History* (cur. M. BEARD, J. NORTH, S. PRICE), Cambridge, Cambridge University Press, 1998, pp. 1-72, part. pp. 18-30; J. RÜPKE, *Fasti sacerdotum: die Mitglieder der Priesterschaften und das sakrale Funktionspersonal römischer, griechischer, orientalischer und jüdisch-christlicher Kulte in der Stadt Rom von 300 v. Chr. bis 499 n. Chr.*, 3 voll., Stuttgart, Steiner, 2005.

⁶⁶ Sul conflitto fra ordini, oltre a quanto già visto sopra, si v. i contributi in *Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders*, a cura di K. A. RAAFLAUB, Berkeley — Los Angeles — Londres, University of California Press, 1986 (su cui part. E. GABBA, *Nuove ricerche sul conflitto fra patrizi e plebei in Roma arcaica*, in *Athenaeum*, 67, 1989, pp. 570-575); R. E. MITCHELL, *Patricians and plebeians: the origin of the Roman state*, Ithaca-New York, Cornell University Press, 1990; M. HUMM, *I fondamenti*, cit., in questo volume.

—disparità che solo con le *leges Liciniae Sextiae* si perverrà (e ancora imperfettamente) a comporre—⁶⁷. A partire, stando alle nostre fonti, dal 367 a.C., nei fatti a cavallo fra III e II sec. a.C., il consolidarsi di una *nobilitas* patrizio-plebea, da cui provengono regolarmente i magistrati e i membri del senato⁶⁸, darà vita ad ulteriori, nuove divergenze di classe: gli appartenenti alla ristretta cerchia della c.d. aristocrazia senatoria godono evidentemente di un numero maggiore di privilegi rispetto ai cittadini romani «comuni», provenienti da famiglie meno antiche, o di minore rilievo politico. Fra essi si annoverano la possibilità di esprimere dal proprio seno i magistrati maggiori, in ispecie i consoli⁶⁹, l'accesso ai sacerdoti, la conoscenza del diritto e l'esercizio della «professione» di *iurisperitus*, la disponibilità di un'ampia cerchia di clienti⁷⁰. Sinanche un altro ceto privilegiato, formatosi a partire dalla seconda guerra punica, l'*ordo equester*, composto di possidenti terrieri, membri delle élites locali naturalizzati, commercianti e ricchi imprenditori, banchieri e *publicani*⁷¹, dispone di prerogative più limitate a fronte della aristocrazia senatoria. Una «aristocrazia del denaro», l'*ordo equester*, i cui membri sono titolari (anche quando non realmente iscritti nelle stesse) di un capitale tale da poter virtualmente rientrare nelle centurie di *equites* affiliate alla prima classe⁷². Nonostante i privilegi acquisiti nel corso della tarda repubblica (diritto a fungere da *iudices* nei tribunali criminali⁷³, diritto di occupare i posti nelle prime file nelle rappresentazioni teatrali⁷⁴, e via elencando), gli *equites* risultarono

⁶⁷ M. HUMM, *I fondamenti*, cit., nel n. 5.

⁶⁸ LIVIO, XXXII,7,8 (sul consolato di T. Quinzio Flaminio); SALLUSTIO, *La guerra giurgintina*, LXIII,6-7 (sul consolato di Mario). Funzionali al formarsi di tale classe dirigente, con la controllata immissione di esponenti di famiglie «nuove» al potere, la *lex Ogulnia* del 300 (LIVIO, X, 6), il plebiscito Ovinio (FESTO, *Il significato delle parole*, sv. *praeteriti senatores*, LINDSAY 290), la *lex Maenia de patrum auctoritate* del 290 (CICERONE, *Bruto* XIV, 55, *In difesa di Plancio*, III, 8): discussione di queste e altre misure in F. CASAVOLA, *Relazione introduttiva*, in *Roma tra oligarchia e democrazia*, cit., pp. 23-37.

⁶⁹ C. NICOLET, *Il mestiere*, cit., p. 406. P.A. BRUNT, «Nobilitas and Novitas», in *Journal of Roman Studies* (=«JRS.»), 72, 1982, pp. 1-17; K.-J. HÖLKESKAMP, *Die Entstehung der Nobilität*, Stuttgart, Steiner, 1987. Di «consoli nominati già in culla» parla Cicerone, *Sulla legge agraria*, 2,100.

⁷⁰ J.-M. DAVID, *La romanizzazione dell'Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2002 (tr. it. dell'originale Paris, Aubier, 1994), p. 40.

⁷¹ C. NICOLET, *L'ordre équestre à l'époque républicaine (312-43 av. J.-C.)*. I. *Définitions juridiques et structures sociales*; II. *Prosopographie des chevaliers romains*, 2 voll., Paris, De Boccard, 1966-1974 (BEFAR, 207 e 270); P. A. BRUNT, *The Fall of the Roman Republic and related essays*, Oxford, Clarendon Press, 1988, pp. 144-193; AAVV, *L'ordre équestre: histoire d'une aristocratie (Ile siècle av. J.-C.-IIIe siècle ap. J.-C.)*. Actes du colloque international Bruxelles-Leuven, 5-7 octobre 1995, a cura di S. DEMOUGIN, Rome, École française de Rome, 1995.

⁷² C. NICOLET, *L'ordre équestre* 1, cit., pp. 46-102, 163-176.

⁷³ *Status quaestionis* sulle diverse *leges iudicariae* e sulla composizione delle giurie nelle *quaestiones perpetuae* in B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., pp. 126-164.

⁷⁴ *Lex Roscia theatralis*: ROTONDI, *Leges publicae*, cit., p. 374 e p. 507.

quasi sempre esclusi dalle massime cariche della *res publica*, dato che «la *nobilitas* si passava il consolato di mano in mano al proprio interno»⁷⁵. Pure lo snobismo e il conservatorismo dell'élite dei *nobiles* non furono efficaci, in ogni caso, a produrne il coagulo in una «casta chiusa»: l'accesso al consolato rimase, per tutta l'epoca repubblicana, virtualmente aperto a chiunque avesse le capacità politiche e fosse fornito dei mezzi finanziari necessari per dare la scalata alla massima carica⁷⁶.

Al di sotto di tali «categorie privilegiate» v'è la massa del *populus Romanus*, composta da piccoli agricoltori e affittuari terrieri, artigiani, piccoli commercianti, lavoratori a cottimo e «liberi professionisti» di rango non elevato (geometri, infermieri, ostetrici, etc.)⁷⁷. I suoi membri accedono ai comizi, ma con diverse limitazioni. In quelli centuriati sono iscritti nelle classi inferiori, che generalmente non giungono ad esprimere la propria *sententia*. Essi possono tuttavia (almeno in parte) far sentire la propria voce nei comizi tributi e nei *concilia plebis*, dato che la strutturazione in tribù (ossia in comparti di residenza) di tali assemblee, benché influenzata anche da criteri di reddito (i proprietari terrieri erano inseriti nelle tribù rustiche, le più numerose e influenti), aveva in ogni caso un'impostazione più democratica rispetto a quella dei *comitia centuriata*. E pure —si è visto— nelle assemblee tribute si votavano quasi esclusivamente leggi aventi ad oggetto il diritto privato, restando le materie di rilevanza costituzionale (come pure l'elezione dei magistrati maggiori) riservate all'assemblea centuriata. Senza contare i meccanismi (perfezionati nell'ultimo secolo della repubblica) in grado di «pilotare» il voto e rendere meno efficace la *sententia* espressa dalle tribù⁷⁸. Insomma, le «classi inferiori», e i *novi cives* (iscritti, come noto, in un novero ridotto di tribù, per diminuirne l'influenza nelle assemblee⁷⁹), rivestono un ruolo di secondo piano nel determinare le sorti della *civitas*. Pur avendo pieno diritto di voto, le decisioni passano, per così dire, sopra la loro testa, essendo rimesse al consesso senatorio e ai ceti che esprimono i magistrati maggiori⁸⁰: situazione che l'oligarchia al potere sarebbe riuscita a governare, sino al II sec. a.C., oltre che facendo leva sulle clientele che la legavano al

⁷⁵ SALLUSTIO, *La guerra giugurtina*, LXIII, 6.

⁷⁶ A. GUARINO, *La democrazia a Roma*, Napoli, Liguori, 1979, part. pp. 59-67; Id., *La costituzione democratica romana e le sue vicende*, Roma, Pontificia Università Lateranense, 2005, part. pp. 31-36; K.-J. HÖLKESKAMP, *Entstehung der Nobilität*, cit., pp. 204-222.

⁷⁷ P.A. BRUNT, *The Roman Mob*, in *Past and Present* 35, 1966, pp. 3-25; G. ALFÖLDY, *Storia sociale dell'antica Roma* (tr. it. di *Römische Sozialgeschichte*⁴, Wiesbaden, Steiner, 1984), Bologna, Il Mulino, 1987, part. pp. 78-88, pp. 109-122.

⁷⁸ Li si veda elencati in A. GUARINO, «L'astratto e il concreto del votante romano», in *Panorami*, 2, 1990, pp. 175-186 (=Id., *Pagine di diritto romano*, 3, cit., pp. 452-463).

⁷⁹ Discussione in L. R. TAYLOR, *Roman Voting Assemblies*, cit., pp. 100-117.

⁸⁰ «Il consiglio pubblico (il senato) e le magistrature erano pressoché completamente fuori della portata di questa massa»: C. NICOLET, *Il mestiere*, cit., p. 406.

ceto medio-basso, anche con l'aiuto di distribuzioni di terra e deduzioni coloniali (destinati a rivelarsi dei forti ammortizzatori sociali); senza tener conto, per il periodo indicato, della forte comunanza di intenti fra ceto dominante e massa del *populus*⁸¹.

Con l'aumentare della plebe inurbata e delle pressioni demagogiche da parte di politici privi di scrupoli, e l'assenza di una forza di polizia in grado di contenere i picchi di disagio sociale, la massa dei cittadini meno abbienti avrebbe finito per rappresentare un fattore politico delicato, dal quale non era possibile prescindere per l'approvazione di istanze favorevoli all'uno o all'altro dei capiparte che si sarebbero succesi negli ultimi decenni della repubblica⁸². La «città-stato» in quanto tale non sarebbe stata in grado di sviluppare strumenti istituzionali evoluti al punto da poterne governare l'espansione indisciplinata: l'allargarsi delle masse dei *proletarii* dentro e fuori di Roma sarebbe stato al contempo sintomo e causa (una fra molteplici) del fallimento del modello cittadino nell'ultimo secolo prima di Cristo.

Uno degli strumenti che consente l'accesso alla *civitas* è la liberazione di uno schiavo ad opera del proprio padrone. La manomissione crea una tipologia particolare di *cives*, i *libertini*, che godono di uno *status* intermedio fra cittadini di pieno diritto ed apolidi⁸³. Se liberati attraverso manomissione solenne, secondo procedure accuratamente regolate dal *ius civile*⁸⁴, i liberti acquisiscono, all'atto della *manumissio*, libertà e cittadinanza assieme. Le loro prerogative di cittadini, all'interno della *res publica*, sono tuttavia sensibilmente limitate. Quanto ai diritti politici, essi vengono iscritti (almeno nella media

⁸¹ Sul «rapporto fiduciario fra massa e classe dirigente», da ultimo, E. GABBA, «Il processo di integrazione dell'Italia nel II secolo», in *Storia di Roma* 2.1, cit., pp. 267-283. V. anche E. FLAIG, «Entscheidung und Konsens: zu den Feldern der politischen Kommunikation zwischen Aristokratie und Plebs», in AAVV, *Demokratie in Rom? Die Rolle des Volkes in der Politik der römischen Republik* (a cura di M. Jehne), Stuttgart, Steiner, 1995, pp. 77-127.

⁸² Vivido ritratto della situazione politica post-sillana in R. SYME, *La rivoluzione romana* (tr. it. dell'originale inglese, Oxford, The Clarendon Press, 1939), Torino, Einaudi, 1964; E. S. GRUEN, *The Last Generation of the Roman republic*, Berkeley, University of California Press, 1974; E. LÉPORE, «La crisi della *nobilitas*: fra reazione e riforma», in *Storia di Roma* II,1, cit., pp. 737-759, part. pp. 740-747.

⁸³ S. TREGGIARI, *Roman Freedmen during the Late Republic*, Oxford, Clarendon Press, 1969; G. FABRE, *Libertus. Recherches sur les rapports patron-affranchi à la fin de la République Romaine*, Rome, École Française de Rome, 1981; J. GARDNER, *Being a Roman Citizen*, London-New York, Routledge, 1993, pp. 7-51.

⁸⁴ Erano sostanzialmente di tre tipi: la più frequente era la manomissione testamentaria, l'ordine di liberazione di un proprio schiavo per atto di ultima volontà (DIGESTO, XL, 4: *De manumissis testamento*); accanto a questa le fonti conoscono una manomissione «*vindicta*» (consistente in un finto processo di libertà, al termine del quale lo schiavo veniva dichiarato libero: FRAMMENTI VATICANI (PAOLO) 50; DIGESTO, XL, 2: *De manumissis vindicta*); e una manomissione mediante iscrizione dello schiavo, da parte del proprio *dominus*, nelle liste del censo, come se fosse *liber et civis Romanus*, caduta in desuetudine nel principato (EPITOME DI ULPIANO I, 8; FRAMMENTO DOSITEANO 17; CICERONE, *Dell'oratore* I, 40).

repubblica) nelle tribù urbane, le più affollate e meno influenti nel voto⁸⁵, ed esclusi dall'elettorato passivo. Analogamente assai limitata, pressoché nulla, la possibilità di partecipazione alle operazioni militari (con conseguente esclusione della possibilità di accesso alla *praeda bellica* o a distribuzioni di terre a veterani)⁸⁶. Anche in riferimento alla loro posizione di diritto civile risultano soggetti a pesanti limitazioni, dovute al legame para-potestativo che si instaura con il loro manumissore (*patronus*)⁸⁷. Un «*zurückgesetztes Bürgerrecht*», una cittadinanza «di secondo piano» (MOMMSEN), la loro, aggravata dalla disomogeneità della loro composizione sociale (si va da imprenditori di grosso calibro a commercianti, da costruttori a gestori di locande e piccole e medie attività, agli strati meno fortunati della popolazione⁸⁸) e dalla solo limitata accettazione sociale anche dei più benestanti fra questi⁸⁹.

Stante la situazione descritta, un ruolo sensibile erano destinati ad assumere i rapporti di clientela e patronato fra i *nobiles* e gli appartenenti agli strati meno elevati, o i personaggi di estrazione libertina: i primi avrebbero avuto appoggio dai secondi nelle competizioni elettorali e nelle principali attività legate alla pubblica amministrazione nelle quali fossero coinvolti, mentre i loro *clientes* potevano attendersi aiuto nei processi, nelle attività imprenditoriali e nelle svariate faccende della vita civile in cui l'intervento di un prominente potesse rivestire utilità⁹⁰. Le clientele contribuivano spesso a ridurre il divario fra classe dirigente e massa del popolino, senza tuttavia eliminare i problemi derivanti dalla struttura classista della società.

⁸⁵ LIVIO, *Periochae* 20: «I libertini, precedentemente distribuiti in tutte le tribù, furono concentrati nelle quattro (urbane), l'Esquilina, la Palatina, la Suburana e la Collina». Discussione dei problemi relativi in L. R. TAYLOR, *Roman Voting Assemblies*, cit., pp. 132-149.

⁸⁶ Che la partecipazione dei liberti all'esercito sia un'eccezione si ricava da LIVIO X, 21, 4 e XXII, 11, 8. Inquadramento generale del problema in Th. MOMMSEN, *Staatsrecht* 3.1, cit., pp. 420-457.

⁸⁷ W. WALDSTEIN, *Operae libertorum*, Stuttgart, Steiner, 1986; C. MASI DORIA, *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli, Jovene, 1993.

⁸⁸ S. TREGGIARI, *Roman Freedmen*, cit., pp. 87-95; J. A. CROOK, *Law and Life of Rome*, Ithaca-New York, Cornell University Press, 1984, pp. 50-56.

⁸⁹ PETRONIO, *Satyricon*, 27 ss.

⁹⁰ Si v. i contributi raccolti in A. WALLACE-HADRILL (ed.), *Patronage in Ancient Society*, London-New York, Routledge, 1989; e le osservazioni di J. M. DAVID, *La romanizzazione*, part. pp. 119-126.